



MINISTERIO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN NÚMERO 087
28 DE FEBRERO DEL 2019

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE APELACION"

LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.

En ejercicio de sus atribuciones legales conferidas en la Ley 1444 de 2011, el Decreto 4108 de 2011, la Ley 1610 de 2013, la Resolución 2143 del 28 de mayo de 2014, el Decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015, la Resolución 02143 del 28 de mayo 2014, La Ley 1610 de 2013, los artículos 17, 485 y 486 del C.S.T y demás normas concordantes, y en especial las establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y,

I.-CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado bajo el número 1165 del 28 abril del 2015, tal como lo determina el Ad-quo. el señor **LUIS REINEL VASQUEZ ARTEAGA**, en su condición de Presidente de la Seccional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU en la Universidad del Cauca realiza la siguiente solicitud mediante Querella Administrativa : *" solicita al Ministerio de Trabajo inicio de una Querella Administrativa Laboral Contra La Universidad del Cauca, Proceso tendiente a evitar la vulneración del Derecho de Asociación Sindical, de Negociación Colectiva y del Debido Proceso por parte de la Universidad, toda vez que el rector ha proferido Resolución de Suspensión Inmediata del Permiso Sindical de la Profesora **GLORIA CECILIA ARBOLEDA**, integrante de la Junta Directiva Nacional de ASPU, en el cargo de Secretaria de dicha Junta Directiva. Resolución que ha sido recurrida por la profesora Arboleda en Reposición y Apelación. La reposición ya fue resuelta por el rector, confirmando la decisión de suspensión. El recurso de Apelación va a ser resuelto por el Consejo Superior en la Sesión del próximo lunes 4 de mayo de 2015. De confirmarse la decisión del Rector, o lo que es lo mismo la Vulneración de los Derechos Fundamentales invocados de **ASOCIACIÓN SINDICAL, DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO**, por parte del Consejo Superior de la Universidad del Cauca..."* y allego documentación. (Folios 1 al 53).

Con fecha mayo 25 de 2015 el presidente de ASPU Cauca, instaura denuncia por presunta Persecución Sindical de la Universidad del Cauca a la Organización Sindical. Al tenor de los siguientes hechos: *"el rector de la Universidad del cauca JUAN DIEGO CASTRILLO ORREGO, en clara actitud de retaliación, arremete contra los directivos y activistas de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU Seccional Universidad del Cauca y logra que la mayoría del Consejo Superior lo respalde. El rector abogado JUAN DIEGO CASTRILLO ORREGO, impuso la drástica sanción de suspensión por 8 meses, al profesor Diego Cáceres Barajas, anterior presidente y actual fiscal de la Seccional de ASPU en la Universidad del Cauca, y el consejo superior, por mayoría, al decidir el recurso de Apelación estableció una sanción en 6 Meses de Suspensión, la que implica el no pago de salarios al profesor durante el mismo término. El Rector de manera unilateral y sin mediar dialogo ni aceptar concertación, SUSPENDIO el Permiso Sindical al que tiene derecho la Profesora Gloria Cecilia Arboleda F, secretaria de la Junta Directiva Nacional de ASPU."* (Folios 55 al 57).

Que por medio de oficio fechado 2 de Junio de 2015, suscrito por **Dr. LUIS REINEL VASQUEZ**, Presidente Seccional ASPU, Universidad del Cauca , informa a la coordinación del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia, Control y Resolución de Conflictos de esta Dirección Territorial que el Consejo Superior de la Universidad del Cauca Mediante Resolución No 024 del 20 de Mayo de 2015, resolvió el Recurso de Apelación, presentado contra la resolución No R-951 del 3 de Diciembre

RESOLUCIÓN NÚMERO 087 28 DE FEBRERO DEL 2019

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE APELACION"

de 2014, confirmando la suspensión a partir de la fecha del Permiso Sindical de la Profesora ARBOLEDA F. (Folio 64).

Que Mediante Auto Nro. 014 de Julio 21 de 2015, el despacho comisionado declaro abierta la averiguación Preliminar, en los términos señalados en la Ley 1437 de 2011 Artículos 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. se comunicó el inicio de la averiguación preliminar, al Representante Legal de la **UNIVERSIDAD DEL CAUCA**, informándole que cuenta con tres (3) días hábiles a partir del recibo de la comunicación para contestar la querella, ejerciendo su derecho de contradicción y defensa, aportar las pruebas y/o solicitara las que pretendiera hacer valer, informando así mismo que el funcionario de Instrucción cito de oficio a la profesora Gloria Cecilia Arboleda, el miércoles 29 de julio de 2015, a Diligencia Administrativa Laboral de Ampliación y Ratificación de Queja. (Folio 89).

Que con Radicación número 2364 de 14 de agosto de 2015, la Dra. Gloria Cecilia Arboleda, allega al despacho copia del Fallo de Tutela de Segunda Instancia, proferido por TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA. Mediante el cual se tutelo por el alto Tribunal los derechos de Asociación, Libertad Sindical y Negociación Colectiva y Debido Proceso de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios-ASPU- representado por el señor Pedro Hernández Castillo y la señora Gloria Cecilia Arboleda: vulnerados por la Nación Ministerio de Educación –Universidad del Cauca. (Folios 137 a 144).

Que con radicados Números 1894 y 1895 de Septiembre 15 de 2015, la funcionaria de instrucción, remitió ante la PROCURADURIA REGIONAL DEL CAUCA, y ante FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, copia de la Declaración rendida el día 3 de Septiembre de 2015, por el señor DIEGO CACERES BARAJAS y documento allegado en la misma. En atención a que se exponen hechos que se relacionan con el Radicado No 1118 del 1 de junio de 2015, que este Ministerio remitió a la citada entidad. Lo anterior para que dentro del ámbito de sus funciones legales las citadas entidades adelantaran las acciones pertinentes de acuerdo a su competencia. (Folio 186 a 187).

Que con escrito Radicado bajo el No 3915 de 18 de diciembre de 2015, la Universidad del Cauca, a través de apoderada presento Descargos. (Folio 224 a 374). Y posteriormente mediante auto Auto No 001 de fecha 27 de enero de 2016, se da apertura al periodo probatorio, decretando la recepción de testimonios e inspección ocular. (Folio 377 a 633). Y Mediante Auto No 001 de fecha 14 de febrero de 2018, se corre traslado a la parte investigada, para que presente sus alegatos de conclusión. (Folio 668 a 670).

y a través de la radicación No 0585 del 07 de marzo de 2018, la Universidad del Cauca, a través de apoderado presento sus alegatos de conclusión. (Folio 678 a 685).

Culminada la averiguación preliminar, el despacho previo informe del Inspector comisionado, considero que había mérito para iniciar procedimiento administrativo sancionatorio contra la **UNIVERSIDAD DEL CAUCA**, ordenándolo mediante Auto No 040 del 26 de Octubre de 2015 Folios (190 a 203), e imputándole los siguientes cargos:..... **"CARGO UNO:** Presunta violación del Artículo 416-A. Las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, en concertación con los representantes de las centrales sindicales. Y los artículos 1 y el Inciso Final y el Parágrafo del artículo 3 del Decreto reglamentario 2813 de diciembre 29 de 2000. Que establecen sucesivamente, los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus Órganos Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización Electoral, las Universidades Públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión. Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el artículo primero de este decreto, en el marco de

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE APELACION"

la Constitución Política Nacional, atender oportunamente las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las organizaciones sindicales de los servidores públicos. PARÁGRAFO. Los permisos sindicales que se hayan concedido a los representantes sindicales de los servidores públicos continuarán vigentes, sin que ello impida que su otorgamiento pueda ser concertado con las respectivas entidades públicas.

CARGO DOS: Presunta violación del Artículo 354 del C.S.T. PROTECCION DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 39 del Ley 50 de 1990.>

Que Mediante radicado No. 0585 del 07 de Marzo de 2018, el apoderado de la Universidad del Cauca, presenta como alegatos de conclusión los mismos argumentos expuestos en los descargos, haciendo énfasis igualmente que las actuaciones de la Universidad frente a la suspensión del permiso sindical de la Docente Arboleda Fernández, fueron adelantadas con soporte legal, y no pueden considerarse per se cómo una conducta antisindical que tenga la capacidad de afectar el derecho de asociación sindical, toda vez que desde el punto de vista objetivo, y ponderando las circunstancias del caso concreto, las conductas y actuaciones de la universidad no son merecedoras de reproche alguno, máxime cuando atendieron a criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la interpretación y aplicación de la norma vigente. A folios (678 a 685).

La Coordinación de I.V.C. de la Dirección Territorial del Cauca mediante Resolución Número 118 de abril 26 de 2018, se decide de fondo, ordenando imponer a la Universidad del Cauca multa equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes por infringir el artículo 416 A del C.S.T., el Decreto 2813 de diciembre de 2000 por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 584 de 2000, en sus artículos 1 y 3 parágrafo.

Tal como lo expone el Ad.Quo y reza en la sumaria: " hechas las notificaciones en los términos del artículo 67 y siguientes del C.P.A.C.A., mediante escrito radicado con número 11EE20187219001000001156 fechado 21 de mayo de 2018, el Dr. Diego Cáceres Barajas, representante legal del sindicato ASPU interpone recurso de Reposición y subsidiariamente de Apelación contra la Resolución 118 de abril de 2018. A su vez, el Dr. Luis Eduardo Córdoba, Apoderado de la Universidad del Cauca, hace uso de los mismos recursos contra el fallo sancionatorio reseñado, según oficio 11EE2018721900100001171 del 24/05/2018. "

II.-CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Es de suma importancia poner de presente que la potestad sancionatoria otorgada a los funcionarios administrativos del trabajo tiene su Genesis en lo dispuesto en el artículo 486 del C.S.T. artículo 7 de la Ley 1610 de 2013, para sustentar las impugnaciones realizadas por las partes en controversia, normatividad que determina literalmente los siguiente:

"Artículo 7°. Multas. Modifíquese el numeral 2 del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:

2. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que indique el Gobierno, tendrán el carácter de autoridades de policía para lo relacionado con la vigilancia y control de que trata el numeral anterior y están facultados para imponer cada vez multas equivalentes al monto de **uno (1) a cinco mil (5.000) veces el salario mínimo mensual vigente** según la gravedad de la infracción y mientras esta subsista, sin perjuicio de las demás sanciones contempladas en la normatividad vigente. Esta multa se destinará al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA..."

La Ley 1437 de 2011 (CPACA) que en su artículo 50 estableció la forma de graduar las sanciones con base en los criterios de:

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.

RESOLUCIÓN NÚMERO 087 28 DE FEBRERO DEL 2019

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE APELACION"

2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas."

Tal como se determinó al decidirse en primera instancia lo que se comparte en la presente alzada, el principio de proporcionalidad no se encuentra explícitamente consagrado en nuestro ordenamiento legal sino que es menester remitirnos al desarrollo jurisprudencial que guarda estrecha relación con disposiciones constitucionales, es así como el artículo 29, que consagra el debido proceso administrativo, entendido este como el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, que guarda relación directa o indirecta entre sí, y cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal, el debido proceso es una garantía que busca asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, la validez de sus propias actuaciones y, resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados en sus derechos.

Después del análisis referido y retomando el concepto de *proporcionalidad*, la Corte ha expresado que se trata de un principio inmanente al Estado de derecho y que se constituye como aquella exigencia que impone la protección del individuo contra intervenciones estatales innecesarias o excesivas que graven al ciudadano más de lo que es indispensable para la protección de los intereses públicos. El principio de *razonabilidad*, por el contrario, expresa la Corte, no es solo una exigencia constitucional sino legal, y no es más que la generalización a todo el sistema de los límites del ejercicio de la discrecionalidad en la administración.

"En lo que refiere el principio de proporcionalidad en tratándose de actuaciones administrativas sancionatorias, ha de tenerse en cuenta que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. En otros términos, la proporcionalidad implica que la sanción no resulte excesiva frente a la gravedad de la falta y, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad".

Tal como lo determina nuestra legislación el derecho de asociación sindical, cuyo fin es facilitar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades propias de quienes promueven y protegen los derechos e intereses de la organización colectiva y sus miembros, presupuesto que resulta ser una herramienta para La Honorable Corte Constitucional quien en reiterados fallos ha determinado que:

"Es claro que una arista del principio de la buena fe es la proporcionalidad en la sanción o prestación impuesta. Es decir, que el de proporcionalidad es también un postulado que informa toda la actividad administrativa y no pretende otra cosa que la adecuación entre medios y fines, entre las medidas utilizadas y las necesidades que se tratan de satisfacer".

En lo que refiere al principio de proporcionalidad, la Corte Constitucional advirtió que en realidad éste debe intervenir en todas las actuaciones de la administración y así expreso:

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE APELACION”

“Se presenta un ejercicio arbitrario de la autoridad cuando se impone a una persona una carga desproporcionada o injusta. Existe desproporción en el uso de las competencias constitucionales o legales si es evidente la divergencia entre los fines buscados con el otorgamiento de dicha competencia y los medios empleados para alcanzarlos. En esta medida, la proporcionalidad que debe regir todas las actuaciones del Estado, incluyendo su actividad contractual a través de la cual realiza sus cometidos, está supeditada al principio de justicia material, el cual es de obligatoria observancia en las actuaciones administrativas, pues la función de aplicar el derecho en un caso concreto no es misión exclusiva del Juez, sino también de la administración cuando define situaciones jurídicas o hace prevalecer sus pretensiones frente a un particular en desarrollo de las competencias y prerrogativas que le son propias.” (Sentencia T-677/04, Corte Const.

El Ad-quo en el caso que nos ocupa, optó por lo menos gravoso para la investigada e impuso una sanción de solo 40 SMLMV, cuando la norma trascrita anteriormente fija un tope de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales, decisión impuesta a la universidad al demostrarse la violación al derecho de asociación y libertad sindical en la medida en que suspendió de manera unilateral el permiso sindical de la Dra. Gloria Arboleda, sin mediar concertación o preaviso formal, dejando de contar la organización sindical ASPU, con uno de sus dirigentes para realizar labores sindicales propias del cargo, actuación que la misma Administración de la Universidad sabía de antemano que no podía restringir de manera unilateral e infundada. Se ejerció en este caso una potestad administrativa sin que encuentre el despacho infracción alguna a los pluricitados principios y los relativos a gravedad de la infracción y graduación de la sanción administrativa.

Como funcionarios de Policía Administrativa se nos asignó la facultad de investigar e imponer sanciones con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal, y en tal sentido, dicha potestad sancionadora se concibe siempre que la Administración Pública haga uso de ella previo respeto al debido proceso de quienes cometan una falta previamente establecida en una norma jurídica.

De igual manera Como autoridad administrativa se interpretó y aplico las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo dispuesto en leyes especiales, entre los cuales se tienen: El Debido proceso, no reformatio in pejus, Igualdad, Imparcialidad, Moralidad, Eficacia, Celeridad para que los procedimientos que se adelantaron, fueran realizados con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas en el ejercicio predeterminado de la Proporcionalidad y razonabilidad.

Jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha definido las características principales de la potestad sancionadora de la Administración y así manifestó: *“ Persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta Política, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, Se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial, Se encuentra sujeta al control judicial, y debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso”* (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-506 de 2002, 2002).

Seria inocuo y no tendría sentido que se otorgara a las autoridades administrativas del trabajo la función de inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento de los postulados laborales y salvaguarda de la efectividad de los derechos fundamentales en materia de derecho individual y colectivo, sin las prerrogativas que permitieran llevar a cabo dichas funciones, siendo la potestad sancionadora una de ellas, y así lo ha concebido el Alto Tribunal al expresar: *“Si un órgano tiene la facultad jurídica para imponer una obligación o para regular una conducta con miras a lograr la realización del interés*

RESOLUCIÓN NÚMERO 087 28 DE FEBRERO DEL 2019

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE APELACION"

general, el incumplimiento de ese mandato correlativamente debe implicar la asignación de atribuciones sancionatorias bien sea al mismo órgano que impuso la obligación o a otro distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de los castigos correspondientes".

Retomando la dosificación de la sanción impuesta a la Universidad del Cauca, vale la pena hacer referencia a las fases o etapas previas a la aplicación de una sanción, en primer lugar, el funcionario del trabajo debe identificar y comprobar la tipificación de la infracción y de la sanción; para ello se identificó como vulnerado el artículo 416 A, Adicionado artículo 13 de la Ley 584 de 2000 que consagra:

"Las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, en concertación con los representantes de las centrales sindicales".

El Decreto 2813 de 2000 "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 584 de 2000", artículo 1 y 3 parágrafo, que textualmente consagran: "Artículo 1º. Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus Órganos Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización Electoral, las Universidades Públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión".

Artículo 3º. "...Constituye una obligación de las entidades públicas de que trata el artículo primero de este decreto, en el marco de la Constitución Política Nacional, atender oportunamente las solicitudes que sobre permisos sindicales eleven las organizaciones sindicales de los servidores públicos.

Parágrafo. Los permisos sindicales que se hayan concedido a los representantes sindicales de los servidores públicos continuarán vigentes, sin que ello impida que su otorgamiento pueda ser concertado con las respectivas entidades públicas".

En la presente enlazada se verifica la adecuación típica realizada por el Ad-quo con la conducta desplegada por la empresa investigada y procedió a calificar la gravedad de la misma aplicando correctamente los criterios de graduación señalados por nuestro ordenamiento Ley 1610 de 2013, donde se establecen unos juicios autónomos y especiales de graduación, pero en momento alguno dicha disposición habla de la graduación de la falta o del rigor de la sanción, razón por la cual ante dicho vacío, debemos remitirnos a lo dispuesto en el artículo 50 del CPACA.

Tal como se determinó en el acto administrativo impugnado el delegado de primera instancia realizó un análisis pormenorizado respecto de la gravedad que revistió la vulneración de los derechos objeto de la presente causa, soportándolos con las probanzas realizadas en la etapa instructiva, realizando un análisis adecuado con respecto de a la responsabilidad y grado de perjuicio ocasionado con la conducta cuestionada, donde de manera unilateral se desconoce el derecho de asociación.

El debatido derecho de asociación sindical en Colombia está consagrado como de rango fundamental, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, consistente en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado o de los empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Política; adicionalmente se encuentra consagrado

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE APELACION”

también en la Declaración de Filadelfia, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en normas fundamentales de la OIT como el Convenio sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación número 87 de 1948; y en el Convenio No. 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva número 98 de 1949.

Resulta imperioso como de igual manera lo determino el ad-quo tener presente que los permisos sindicales, son una de las formas para hacer efectivo el ejercicio de dichos derechos los cuales se vieron menguados por la decisión unilateral de la Universidad de suspender el permiso concedido a una de sus miembros, olvidando que la misma pertenecía a la Junta Directiva Nacional donde desempeñaba el cargo de Secretaria, actuación que como se ha dicho, vulneró la garantía del derecho de asociación sindical, y en tal sentido, se logró restringir la actividad de la organización sindical ASPU y afectar así el derecho de asociación sindical, pues la Docente en comento debió desplazarse a la ciudad de Popayán en procura de la defensa de sus derechos, inicialmente a través de la concertación la cual fue inoperante, lo que conllevó a que la Dra. Arboleda se viera avocada a poner en funcionamiento el operador judicial mediante acción de Tutela en procura del respeto de sus derechos fundamentales, que finalmente fueron reconocidos frente al fallo fechado Agosto 12 de 2015, cuando la Entidad Educativa mediante acto Administrativo ordena suspender y dejar sin efectos la resolución administrativa que suspendía el permiso sindical de la precitada docente. Con este proceder unilateral de la Universidad del Cauca no solo se ocasionó un desgaste del aparato judicial si no que de igual manera durante (8) meses se dejaron de atender actividades inherentes a la Organización sindical ASPU. En la órbita Nacional a que pertenecía la funcionaria suspendida en su fundamental derecho de permiso sindical.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto considera el despacho que no existen argumentos de hecho y derecho que soporten la modificación de la sanción impuesta a la Universidad del Cauca al estar demostrado de manera fehaciente que con la limitación de la garantía del permiso sindical objeto de la presente causa, se limitó la actividad de la organización sindical y con ello el derecho de asociación sindical lesionándose los intereses de ASPUD, que por lo demás agotó todos los medios a su alcance para dirimir este conflicto a través del diálogo y la concertación sin lograr dicho cometido. Para culminarse con acciones de carácter administrativo con el desenlace conocido por los sujetos procesales.

Ahora bien, en lo que hace referencia a los planteamientos de impugnación presentados por el Dr. Diego Cáceres Barajas, quien sustentó su inconformidad frente a la Resolución 118 de 2018 en el hecho de haberse iniciado un proceso disciplinario en su contra el cual culminó con sanción de suspensión por el periodo de 6 meses, el cual considera un acto de persecución por su condición de directivo de ASPU, y un acto de discriminación sindical.

En el caso concreto, la sanción disciplinaria al Dr. Cáceres Barajas no se convierte en un elemento esencial para concluir que se presentó un acto con móviles discriminatorios y contrarios a la libertad sindical, ni mucho menos se encuadra dentro de los parámetros por el esbozados “violación del artículo 354 del C.S.T., Artículo modificado por el artículo 39 del Ley 50 de 1990” y en ese orden de ideas, para el Ad- Que en la presente alzada no son suficientes los argumentos de defensa y por el contrario dan más claridad y certeza en la dirección correcta del actuar de la Territorial al ajustar su actuación procesal a la Constitución y a la ley, pues los elementos de juicio que reposan en el expediente, tal y como se ha dejado sentado, se desprende que el proceder de la Universidad no evidencia una intención de afectar la estabilidad y existencia del sindicato ASPUD, como tampoco se pudo evidenciar que realizó actuaciones que puedan catalogarse como de persecución en contra de la agremiación accionante, de tal manera que del análisis pormenorizado de los eventos que el legislador considera como atentatorios contra el derecho de asociación sindical, en ninguna de las conductas allí descritas puede encuadrarse los actos denunciados por el accionante.

RESOLUCIÓN NÚMERO 087 28 DE FEBRERO DEL 2019

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE APELACION"

En atención a lo anteriormente expuesto, considera el despacho que no existen argumentos de hecho y derecho que soporten la modificación de la sanción impuesta a la Universidad del Cauca y en consecuencia se confirmara la decisión tomada a través de Resolución No. 118 del 26 de abril de 2018.

III.-DECISIÓN FINAL:

Por las razones indicadas, este Despacho

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:

CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la Resolución número 118 del 26 de abril de 2018, "*Por medio de la cual se decide un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio*", adelantado en contra de la **UNIVERSIDAD DEL CAUCA**, Nit. **891500319-2**, entidad Representada Legalmente por el Doctor JOSE LUIS DIAGO FRANCO, identificado con cédula de ciudadanía No 10.535.839 de Popayán (Cauca), o quien haga sus veces, con dirección de notificación judicial en la calle 5 No 4-70 de Popayán Cauca.

ARTICULO SEGUNDO:

NOTIFICAR a los jurídicamente interesados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del C.P.A.C.A. o Ley 1437 de 2011, haciéndoles saber que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

ARTICULO TERCERO:

EJECUTORIADO el presente acto administrativo devuélvase en su integridad a la Coordinación de inspección Vigilancia, Control, Resolución de Conflictos, Conciliación de la Dirección Territorial del Cauca para lo de su competencia.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

OSCAR HERNANDO TORRES LUNA
DIRECTOR TERRITORIAL